

GENERO, ABORTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL EN YUCATÁN

Héctor Joaquín Bolio Ortiz¹

Juan Pablo Bolio Ortiz²

RESUMEN

El presente trabajo estudia y analiza los principales aspectos contenidos en la legislación Penal del Estado de Yucatán respecto al aborto, sus disposiciones, excluyentes del delito, así como los ejes de política pública abordados en el Estado en pro del desarrollo social de las mujeres que se ven inmersas en situaciones abortivas. Asimismo es importante reflexionar en torno al papel que tienen dichas políticas públicas en el seno feminista, y la manera en que se están abordando estas problemáticas, ya no solo desde el discurso político, sino en la ejecución y aplicación de las mismas. Para ello se recupera el discurso de abogadas ligadas a los procedimientos jurídicos penales en tribunales.

Palabras clave: Aborto, Yucatán, Derechos Humanos, Legislación

¹ Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, Maestro en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional por el Instituto Tecnológico de Mérida, Maestro en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, Doctorante en Ciencias Sociales UADY, investigador adscrito al Centro de Investigaciones Sociales y Estudios Jurídicos de la Península A.C. Abogado litigante en Despacho Jurídico Abogado Héctor Bolio Pinzón. boliojuridic@hotmail.com,

² Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, Maestro en Historia por el CIESAS Peninsular, Doctorante en Historia CIESAS, Doctorante en Antropología UNAM, investigador adscrito al Centro de Investigaciones Sociales y Estudios Jurídicos de la Península A.C. Abogado litigante en Despacho Jurídico Abogado Héctor Bolio Pinzón. boliomania1@hotmail.com

1.- INTRODUCCIÓN

Para entrar al análisis del aborto es necesario realizar un estudio de manera integral, entendiendo este fenómeno como un dogma complejo no solo desde el plano normativo, sino desde su aspecto social abordando los planteamientos teóricos-metodológicos de la perspectiva de género, comprendiendo que las mujeres que se ven involucradas en la mayoría de los casos se encuentran en escenarios de desventaja tanto social como jurídica, precisamente, grupos vulnerables en este caso hablamos de mujeres marginadas, situación que redundará en un bajo nivel de acceso a los derechos humanos básicos como la salud, la educación y la vivienda.

Nos interesa la explicación de los objetivos contenidos en los diversos programas de los tres niveles de gobierno, para la inclusión y despenalización en su caso de los diferentes grupos sociales involucrados en situaciones de esta índole. En este sentido y pensando en no realizar una disertación meramente dogmática jurídica de los instrumentos y políticas en torno al aborto, se plantea un análisis a partir de entrevistas a mujeres abogadas litigantes y relacionadas en juicios penales relativos a este delito contemplado en Yucatán, todo ello con el objeto de no quedarse en el plano meramente jurídico y poder entender como este delito se lleva a la práctica y la cosmovisión de los actores en los diversos tribunales penales, en este caso litigantes mujeres.

El presente artículo tiene como objetivo ubicarnos en los principios teóricos y jurídicos que rigen el tema del aborto en el Estado de Yucatán para contrastarlo con lo que opera en la práctica cotidiana, a partir del trabajo antropológico jurídico y la visión social que se tiene del mismo en especial la de las mujeres.

El trabajo está estructurado en tres partes. En la primera **sección** se narra los elementos y actividades contenidas en torno al aborto, es decir el contexto histórico, jurídico y político en el que surge, y sus principales sanciones y tipos jurídicos. Se distinguen por un lado los estudios y conceptos teóricos feministas y del desarrollo económico imperante, en torno a las mujeres que abortan, derechos humanos, desarrollo, pobreza y exclusión social. En la **segunda sección**, se explica la metodología empleada en el presente caso, analizando la información dada por tres informantes mujeres, que nos permiten contrastar lo que sucede del plano jurídico a los hechos sociales, para ello se emplea una metodología trazada en el método Antropológico-Jurídico de contrastación entre normas y prácticas. **La tercera y última sección** recoge mi opinión o juicio crítico de la situación que se vive en torno al aborto en el Estado de Yucatán a partir del procesos de jurídico-feministas.

2.-EJE TEÓRICO

Estudios con Perspectiva de Género

Los estudios con perspectiva de género, surgen a partir de la necesidad de reivindicar el papel de las mujeres en el contexto social y económico en el mundo, todo ello en razón de la exclusión histórica que han padecido las mujeres en todos los ámbitos de la vida en sociedad, desde trabajos informales hasta difusión científica, las mujeres se ha visto rezagada de la toma de decisiones y el involucramiento como líderes en política, economía y ciencia, todo ello por la manera en que se conformaron los Estados Nacionales, y la segregación histórica en que se le ha alejado de los esquemas del poder.

Comenzaré por definir que es el género, acorde con el Manual el género en la Investigación:

“Género hace referencia a la construcción social de mujeres y hombres, de feminidad y masculinidad, que varía en el tiempo y el espacio y entre las culturas. La idea de género surgió en los años setenta y

fue propuesta por las teorizadoras feministas que desafiaron la posición secundaria de las mujeres en la sociedad. Se aleja de la noción de sexo para señalar que la biología o la anatomía no son un sino. Es importante distinguir claramente entre género y sexo. Ambos términos se usan a menudo indistintamente, pero conceptualmente son distintos” (Gobierno Español, 2011:8).

Parafraseando a Blazquez (2011), las mujeres se han visto afectadas por los procesos de colonización o dominación política y cultural a través del cual el Estado llegó a manejar la vida social y a centralizar el poder. El aparato gubernamental tuvo interés en ejercer el control social a través de las élites, reproduciendo violencia y dominación, mediante la introducción de severas normas morales que regulaban las distintas actividades sociales, como el trabajo y el matrimonio. Asimismo asignando roles al hombre y a la mujer, todo ello se puede observar hoy en día con las nuevas formas de colonización a través de la mercadotecnia y medios de comunicación.

En esta tesitura es importante contextualizar el papel de la mujer, desde aspectos específicos como es el aborto, para ello en un primer momento resulta crucial acercarse al estudio de lo que dispone la norma, para posteriormente recuperar algunas experiencias de vida a partir de entrevistas semidirigidas.

La legislación Penal y sus implicaciones

Podemos considerar como antecedente histórico normativo del aborto el derecho canónico, en el cual, en 1588 la penitencia católica por aborto se convierte en excomunión. Preocupado sobre la prostitución en Roma, el Papa Sixto V enunció el edicto papal *Effraenattam*, en el cual sancionaba al aborto con excomunión, incluido el terapéutico. Se desarrolla de esta forma la tesis según la cual el aborto es el aniquilamiento de un hombre, por ello se equipara al homicidio, este hecho hizo que la posición de la Iglesia influyera considerablemente sobre las

legislaciones laicas. Para la Iglesia católica: “Todo aborto violaba la ley de Dios” (Molina, 2006: 86-87).

De tal suerte, que durante la época colonial existía en la Nueva España un sistema mixto, donde la Corona combinaba gran cantidad de jurisdicciones: la civil, la religiosa, la militar, la de hacienda y la de los pueblos, el aborto fue verdaderamente penado por las autoridades.

La legislación y normatividad de todos los países del mundo es el medio por cual el Estado determina con una serie de disposiciones jurídicas, el control adecuado de una sociedad, por medio de normas que confieren obligaciones y derechos para los ciudadanos que en él habitan, de tal manera que encontramos al derecho como el medio conector entre la sociedad y sus derechos. El derecho no puede ser el obstáculo al cambio social sino el promotor del mismo, la palanca fundamental para nuestro desarrollo en sociedad (Cárdenas, 2007:23). La aplicación y cumplimiento de las normas no resulta fácil de entender y mucho menos cuando se piensa que los derechos en ellas contenidas se tornen efectivos. En términos teóricos la efectividad de la ley está relacionada con la satisfacción de la misma.

Al abordar los estudios de la aplicación efectiva de la norma, desde una óptica de epistemología feminista, resulta fundamental recuperar los principios contenidos en los derechos humanos, para poder transformar los defectos en las lógicas estatales e institucionales y cuestionar la aplicación efectiva de la norma.

El aborto en la legislación Penal del Estado de Yucatán, es una práctica delictiva sancionada, y en su esencia social es mucho más que un simple tipo penal, es decir la mujer que decide abortar se tiene que enfrentar a diferentes componentes sociales, como el jurídico, religiosos, político, familiar, de salud y económico.

Como se ha referido en el presente trabajo y es de todos conocidos la mujer históricamente ha sido un grupo social vulnerable, al cual, se le ha privado de diversos derechos entre ellos el de la facultad de elegir. No obstante a partir de las reformas constitucionales en pro de los derechos humanos teniendo como eje el principio pro persona, el artículo 1 de la Constitución Política Mexicana (2014), establece “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

En este orden de ideas, cuando hablamos del aborto y poca o nula posibilidad que existe en el Código Penal de Yucatán, de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y su futuro como persona, podríamos hablar de una violación fundamental al principio de no discriminación, consagrado en el art. 1 de la Norma Constitucional.

Aunado a este derecho en pro de la no discriminación tendríamos que hablar de igual forma del derecho humano de la mujer de acceder a los servicios de salud, en los casos de atenuantes y excluyentes del delito, el cual el Estado tiene la amplia obligación de generar los espacios y el acceso de todas las mujeres en estos supuestos para que las mujeres cuenten con todas las garantías y derechos en cada caso.

El artículo 4 de la Constitución establece la igualdad del varón y la mujer ante la ley, y como esta velara y protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Asimismo, nos habla de la libertad de elección y decisión de manera libre, responsable e informada, sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. De igual forma en este trabajo se reviste la protección de la salud, y la obligación concurrente por parte del gobierno federal y estatal para el acceso a la salud.

Anand Grover (2011) relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), comenta sobre el derecho a la salud “las leyes que penalizan o restringen el aborto inducido son el ejemplo paradigmático de las impermisibles barreras al derecho a la salud de las mujeres, y deben ser eliminadas. Estas leyes infringen la dignidad y autonomía de la mujer, restringiendo severamente su toma de decisiones respecto a su salud sexual y reproductiva”.

También señala la prohibición penal del aborto “es una muy clara interferencia del Estado en la salud sexual y reproductiva de la mujer porque restringe el control de la mujer sobre su cuerpo, y exponiéndola a riesgos innecesarios”. Y que “los Estados están obligados a asegurar que no se niega a las mujeres la atención médica post-aborto necesaria, independientemente de la legalidad del aborto practicado”. Conjuntamente, “la Ley no puede obligar al personal sanitario a denunciar a las mujeres a las autoridades por servicios de aborto” y, por otra parte, sí “deben proteger a los que practican abortos del acoso y violencia perpetrada ya sea por motivaciones religiosas u otras”.

Por su lado el Programa de Acción del Cairo de la ONU adoptado por diferentes naciones en 1994, estipula “todas las parejas y todas las personas tienen el derecho fundamental de decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y de disponer de la información, la educación y los medios necesarios para poder hacerlo”. Para ello, el Estado debe proporcionar “los más amplios servicios posibles de planificación familiar, maternidad segura, manejo de las complicaciones del aborto -entre otros-, sin ningún tipo de coacción”.

Acorde con Carpizo (2008:19), la decisión de la interrupción del embarazo corresponde a la mujer, sin necesidad de la voluntad del varón, porque la situación entre ellos, y su participación en el desarrollo del embarazo, es muy diferente; quien carga y quien nutre con su cuerpo a producto es la mujer, ella es quien sufre los cambios fisiológicos y síquicos del embarazo, así

como las consecuencias emocionales, laborales y sociales. Si la decisión fuera de ambos, el varón estaría decidiendo sobre el cuerpo de la mujer, lo cual sería discriminatorio y violatorio del principio de igual.

El obligar a la mujer a tener un hijo no deseado, situación en que la formación e integración de la familia será nula o casi nula, por la acción punitiva del Estado, es también una acción discriminatoria hacia la mujer. La denegación de asistencia clínica en aquellos casos en los que la mujer los requiere, en cuanto a su condición de género, constituye una violación a su derecho a la no discriminación.

A nivel local el aborto es definido por el Código Penal de Yucatán como: “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez, este delito es imputable para cualquier persona que hiciere abortar a una mujer, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento y cuando faltare éste, tendrá agravantes respecto de la pena que es de 1 a 5 años de prisión” (*cfr.* artículos 389-390,2014).

Por su parte el artículo 392, del ya citado Código estipula que se impondrá de seis meses a un año de prisión, a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, si se procuran las siguientes tres circunstancias:

- I. Que no tenga mala fama;
- II. Que haya logrado ocultar su embarazo, y
- III. Que éste no sea fruto de matrimonio.

Lo anterior expuesto, son atenuantes del delito con respecto a la sanción más no excluyentes del mismo. Cuestión que refleja como la legislación estatal resulta novedosa y protectora de la mujer bajo diferentes circunstancias.

Ahora bien, el Código Penal de Yucatán, no solo incorpora atenuantes, sino también excluyentes del delito, estos están previstos en el artículo 393 del Código Penal multicitado, el dispositivo reza: “El aborto no es sancionable en los siguientes casos:

- I. Cuando sea causado por acto culposos de la mujer embarazada;
- II. Cuando el embarazo sea el resultado de una violación;
- III. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora;
- IV. Cuando el aborto obedezca a causas económicas graves y justificadas y siempre que la mujer embarazada tenga ya cuando menos tres hijos, y
- V. Cuando se practique con el consentimiento de la madre y del padre en su caso y juicio de dos médicos exista razón suficiente para suponer que el producto padece alteraciones genéticas o congénitas, que den por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves.”

En síntesis, podemos señalar que el Estado de Yucatán cuenta con una serie de componentes en su legislación penal que protege a las mujeres en caso de incurrir en el tipo delictivo, la pregunta surge cuando trasladamos del terreno legal al espacial social, es decir: ¿Qué pasa con las mujeres que usualmente son denunciadas a pesar de existir estas atenuantes y excluyentes del delito? ¿Qué labor juegan las autoridades judiciales y administrativas en la gestión y educación jurídica para la población? ¿Cuál es la concepción de las abogadas

litigantes respecto a la defensa jurídico-procesal en caso de abortos? ¿Existe una violación fundamental al principio de no discriminación, consagrado en el art. 1 de la Norma Constitucional? y ¿Qué papel juegan las profesionales del derecho, al momento de confrontarse con estos casos?

Partimos de la idea que son diversos factores que juegan una importante labor, al momento de evaluar la efectividad del cumplimiento de la norma, entre ellas una adecuada política de gestión y concientización social que no criminalice a las mujeres que se ven en la necesidad de practicarse un aborto, donde intervienen diversas prácticas sociales e instituciones como la Iglesia.

3.- METODOLOGÍA

La metodología empleada en esta investigación parte de un enfoque cualitativo, a partir de la postura ideológica de la perspectiva feminista de las representaciones sociales, ligado al método antropológico jurídico, utilizando diversas técnicas de investigación, entre ellas la observación participante, entrevistas y análisis jurídico, que tengan relación directa con la representación del aborto desde lo plasmado en la norma hasta los puntos de vista situados en concreto por mujeres profesionales del derecho en el ámbito a estudiar.

Representaciones sociales y la antropología jurídica

Parafraseando a Jazmín Mora y Fátima Flores (2010, pág.368), las representaciones son un conocimiento socialmente elaborado y compartido que se construye y reconstruye a partir de las experiencias, de la información conocimiento, y modelos de pensamiento que se transmiten a través del proceso de socialización y de la comunicación social; el sujeto aprende una parte de esta realidad, organiza la información, la estructura, le da cierta coherencia y crea su visión propia, que de algún modo va a condicionar su acción.

Fátima Flores (2013, pág. 97) en el libro *Representaciones sociales y contextos de investigación con perspectiva de género* señala que un objeto de representación social que ha sido resignificado en la cultura no puede ser explicado únicamente desde un ángulo cognitivo, sino que es necesario recurrir a una visión mucho más social en donde se articulan subjetividades, creencias y actitudes. Por su parte Bourdieu (2010, pág. 9), propone alejarse de la visión de espacios o escenarios “simplistas y unilaterales” para reemplazarse por una visión compleja y múltiple fundado en las mismas realidades cruzadas.

La idea es partir de un análisis de fuentes jurídicas, entrelazando las representaciones sociales en relación al aborto y el entramaje social, entendido esto como lo plantea Clifford Gertz, como las instituciones y estructuras que determinan el devenir simbólico y representativo para una sociedad.

En el derecho es evidente que las interacciones humanas están en todo momento, no solo plasmadas como base de supuestos jurídicos, sino como realidades que se viven día con día en los tribunales, juzgados y despachos, produciendo símbolos, prácticas y representaciones, entre la norma y el hecho jurídico. La idea es partir de que los papeles y roles socio-jurídicos, las estructuras institucionales, las normas y valores suministran la materia prima con que los individuos formulan sus definiciones, estos elementos por sí mismos no determinan esta definición ni cómo se comportan con ella. (Ruiz, 2003: 43-44).

José Israel Herrera (2010) ha analizado el rol de diversos actores como litigantes o jueces, en las prácticas jurídicas de pueblos indígenas, desde la percepción de agentes, para ello recurre a diversas fuentes como juicios verbales ante los jueces de paz en diversos municipios de Yucatán, lo que hace que su investigación sea un verdadero acercamiento a la combinación del derecho y antropología como ciencias. El estudio del derecho se concentra en la comprensión

de la norma jurídica y las relaciones sociales que rigen; sin embargo, el estudio puro del derecho solamente nos lleva a la contemplación filosófica de lo normativo, en razón de ello es necesario estudiar a la norma jurídica en relación con el contexto social donde se aplica, entendiendo el conocimiento que implica el binomio que integra lo antropológico-jurídico, es decir la relación entre sociedad y derecho, aplicando instrumentos de investigación que nos permitan observar e interpretar hechos sociales, para determinar la eficacia y validez normativa.

En esta tesitura se recupera la metodología empleada por la Doctora Norma Blazquez (2011:108), en torno a reflexionar a partir de las experiencia de mujeres en un aspecto social en este caso el aborto en Yucatán, ya no únicamente desde la legislación sino desde el sentir acerca de sus propias vidas y de las de los hombres, y mantener posiciones críticas frente a las concepciones tradicionales sobre las vidas de hombres y mujeres. Los métodos seleccionados para investigar fenómenos dependen de las preguntas que se hacen y de los tipos de conocimiento que se buscan, ambos reflejan los intereses sociales de quien investiga. Se parte de una observación de los fenómenos jurídico-sociales en relación al aborto en Yucatán de manera holística, tal como refiere Martha Patricia Castañeda en su capítulo de libro *Etnografía Feminista* (2010, pág. 230) observar es entender lo que se mira dentro del contexto que tiene lugar, identificando a las personas involucradas en producir y reproducir, crear y recrear, inventar y transmitir el sentido cultural de aquello que se experimenta.

De igual manera (2011 :115) se aborda desde una corriente del posmodernismo feminista comprendiendo a las mujeres situadas desde un campo de acción específico, como en el presente caso abogadas penalistas, pudiendo obtener la pluralidad permanente de perspectivas, desde la mirada aquí ahora.

4.- ANÁLISIS

Para este apartado del trabajo se estudian tres entrevistas a litigantes mujeres que precisamente comentan sobre casos judiciales de aborto que han tenido en sus despachos. Se toma como referencia el libro de Pierre Bourdieu (2010), el cual utiliza entrevistas semi-dirigidas. Partiendo de la metodología antropológica jurídica, se repara en el sentido de que no se trata de hacer “disertaciones escolásticas sobre la hermenéutica o la situación de comunicación ideal”, sino en una manera realista de explorar la relación de comunicación en su generalidad que consagrarse a los problemas prácticos y teóricos que pone de relieve el caso particular de la interacción entre el investigador y aquel que se interroga (Bourdieu, 2010: 527).

La abogada X de 29 años, la abogada Y de 31 años y la abogada Z de 55 años. El instrumento utilizado semi-dirigido fue muy simple consistió en las siguientes tres preguntas, tomando como base el método de análisis de entrevistas planteado por Pierre Bourdieu en *La miseria del mundo*:

- 1.- ¿Qué perspectiva tiene del aborto en Yucatán?
- 2.- ¿Son funcionales las atenuantes y excluyentes del delito contempladas en el Código Penal de Yucatán?
- 3.- ¿Qué tipo de mujeres suelen acudir a ustedes por asesoría jurídica?

En cuanto a la primera pregunta las tres abogadas coincidieron en que el aborto es un problema de salud pública y que desgraciadamente afecta en su mayoría a las mujeres de clases económicas pobres, o al menos, estas son las que generalmente han acudido a su asesoría.

Una segunda consideración que se tomó fue en torno a las atenuantes y excluyentes del delito ¿qué tan funcionales son estas atenuantes y excluyentes tanto para la fiscalía como para los juzgados penales en procedimientos de aborto? Las tres coincidieron en que de entrada las dos primeras atenuantes estipuladas en el artículo 392 del Código Penal del Estado de Yucatán, son un verdadero problema acreditarlas ¿cómo acreditar la mala fama pública y que no se haya ocultado un embarazo?, sobre todo por la subjetividad de las mismas, en este sentido se coincide que es prácticamente imposible demostrar estas atenuantes, no así la tercera atenuante relativa a que el abortado no sea fruto del matrimonio.

Con relación a este último punto, las informantes dijeron que al menos, en los casos que han observado nunca ninguna mujer ha hecho alusión a abortar en virtud de que el producto sea de otra persona fuera del matrimonio. En todo caso, este tipo de atenuante del delito solo sería efectivo para aquellas mujeres que se encontraran casadas.

Hablando con la abogada X de 29 años, le dije, usted habla del aborto como un problema en hospitales, ¿por qué?:

La mayoría de los casos de aborto suceden en hospitales, no es una denuncia que el padre o la madre interponga, esto sucede por médicos quienes reciben a los pacientes y no les quieren practicar el aborto automáticamente le dan parte a la Fiscalía y proceden contra ellas, y naturalmente ni en cuenta toman las atenuantes y menos las excluyentes de delito.

La abogada Y de 31 años dijo en el mismo tenor:

Es que es importante comprender que las atenuantes y excluyentes se tiene que acreditar, en un proceso judicial, no es así nada más, es decir ya iniciado el proceso se exhibirían las

respectivas pruebas para hacer validad una excluyente de la contempladas en el artículo 393, ningún médico en Yucatán haría un aborto, ni si quiera en casos de violación, el Estado y los centros de salud, no han establecido los mecanismos para hacer valido esto. Yo creo que el abogado debe saber hoy en día de medicina y viceversa el medico de derecho, estos son los requerimientos actuales del Mundo que vivimos.

La abogada Z de 55 años, explicó casos donde el mismo médico da parte a las autoridades:

Un caso de enero del 2014, el mismo hospital O’Horan dio parte a la fiscalía, porque el medico diagnostico que la muchacha se había auto medicado unas pastillas abortivas, es decir el nunca tomará en consideración las atenuantes o excluyentes, ellos no se arriesgan, es más ni las conocen no se las hacen llegar, no hay educación jurídica en hospitales, las mujeres quedan en estado de indefensión, les dicen que lo vean ante la fiscalía o el Juzgado Penal, los médicos alegan que no les compete. Yo creo, que es un problema de aplicación del Código Penal donde juegan un papel importante los convencionalismos sociales y las normas morales, de la sociedad yucateca.

Todas las informantes coincidieron en que la mayoría de mujeres que acude para consultarles se encuentran en una situación económica difícil, generalmente vienen de los extractos bajos en el Estado de Yucatán. La abogada Z nos dijo que otro problema, es que precisamente por lo poco funcional de las atenuantes y extenuantes del delito, muchas mujeres terminan acudiendo a clínicas privadas, donde arriesgan su vida y salud, lo cual resulta un verdadero problema pues ponen en riesgo incluso la vida.

De las entrevistas vertidas, es evidente que existe un problema muy grande en cuanto a cómo hacer funcional el Código Penal de Yucatán, y la adecuada necesidad de implementar una

verdadera cooperación entre el sector salud y el sector jurídico. Si existe una serie de atenuantes y de excluyentes, ¿por qué no usarlas? Es evidente, que el legislador al considerarlas en el Código Penal, pensó en la serie de problemas que el aborto acarrea en la sociedad yucateca. Nuestro análisis, no pretende decir si las atenuantes y excluyentes son adecuadas o no, únicamente poner sobre la mesa el contraste entre normas y practicas jurídicas, entendiendo que en ellas se da un fenómeno sociocultural importante en el que se ven inmersas las mujeres y donde los factores económicos, sociales y de salud juegan un papel importante.

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del tema vertido en este trabajo, se pueden sacar algunas consideraciones de suma relevancia:

Una primera consideración sería la gran distancia que hay entre el derecho y las practicas, las cuales reflejan como a pesar de que en Yucatán el aborto está regulado a partir de una serie de atenuantes y excluyentes, dista mucho lo que sucede en la vida cotidiana con las mismas, ya sea por lo difícil de acreditarlas en los ministerios públicos y juzgados, ya sea por la poca discrecionalidad que podrían tener los médicos a la hora de aplicarlas.

Otra sería precisamente la imprescindible necesidad entre los sectores salud y jurídico, cuestión que al parecer perjudica ampliamente a las mujeres que acuden a los hospitales y que en gran cantidad de ocasiones son consignadas a las autoridades, según lo reflejan las entrevistas hechas. Y el análisis hemerográfico realizado en este trabajo.

Pensar en obligar a una mujer a tener un hijo no deseado, pienso que es una violación a su derecho humano a la no discriminación por razones de género, así mismo el hecho que no se le brinde a las mujeres el acceso a los servicios de salud pública en caso de aborto, representa

violaciones a sus derechos humanos uno el derecho a la salud, que tiene una conexión directa con la no discriminación a la mujer.

Por último, se debe decir que si bien el aborto es un problema de salud pública, igual es un problema sociocultural, donde entran en juego no solo el derecho positivo, sino una serie de aspectos sociales, económicos y culturales, que hacen que las prácticas, significados y representaciones del aborto permeen en el utillaje mental de las personas. Utillaje que de alguna manera representa normas morales y convencionalismos sociales, que impiden que lo dispuesto en las normas jurídicas o no se lleve a la práctica, o se coarte su aplicación.

En este sentido se repara en las ideas de Norma Blazquez (2011) en la urgente necesidad, de involucrar a las mujeres en investigaciones en torno al aborto en Yucatán, sus causas y consecuencias, para ello urge establecer mecanismos en el seno Gubernamental y de Administración Pública y de Justicia donde las mujeres se vean mayormente involucradas con el fin de generar iniciativas en las instituciones cuenten con áreas dotadas para realizar de manera transversal con enfoque de género estas investigaciones.

De igual manera se sugieren algunos aspectos a considerar cuando se aborde la temática del aborto en el Estado de Yucatán.

- Hablar con los encargados del centro de salud, sensibilizarlos con respecto al tema del aborto, darle a conocer los derechos de las mujeres embarazadas y las excluyentes del delito en cada caso concreto.
- Continuar las investigaciones del aborto, a partir de las necesidades de las mujeres y recuperar las experiencias partiendo de foros y grupos focales

- Acercarse a las autoridades estatales y cuestionar acerca de la existencia de algún plan o estrategia para el combate a la desinformación del aborto, y las implicaciones sociales que conlleva la mala implementación de políticas públicas al respecto, que desembocan en exclusión social para mujeres.
- Dirigir una investigación con perspectiva de género, para comprender las cuestiones e implicaciones jurídico-sociales de las mujeres que han abortado o que tienen la idea de hacerlo.
- Fomentar la participación activa de mujeres de diversos círculos académicos y sociales, en la implementación de políticas públicas e investigación jurídico-social con perspectiva de género, en lo relativo al aborto.
- Indagar si existen programas acerca del cuidado de la alimentación de la población y de los diferentes grupos etarios.
- Proponer investigaciones sobre el aborto en Yucatán, a partir de la determinación de los roles y diferencias entre hombres y mujeres, desde diferentes perspectivas y ámbitos de acción.
- Contrastar las normativas penales, con la cosmovisión de la sociedad femenina en Yucatán y la ejecución de las políticas públicas, así como el accionar de los servidores públicos desde el presidente municipal hasta los empleados del Centro de salud, para poder contextualizar ideología, cosmovisión y otros conceptos fundamentales para poder pensar en el respeto a los derechos humanos de mujeres en situación de abortos.

BIBLIOGRAFÍA

BLAZQUEZ, Norma. *El retorno de las brujas, incorporación, aportación y crítica de las mujeres a la ciencias.* Cuernavaca: UNAM, CRIM, 2011.

BORDIEU Pierre. *La miseria del mundo*, Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 2010.

BURKE, Peter. *¿Qué es la historia cultural?*, traducción de Pablo Hermida Lazcano, Editorial Paidós, Iberia, Madrid, España, 2004.

CASTAÑEDA, María. Etnografía Feminista. En N. Blazquez, F. Flores , y M. Ríos, *Investigación Feminista, Epistemología, Metodología y Representaciones Sociales* (pág. 217.238). México: UNAM, 2010.

CARPIZO, Jorge. *Derechos Humanos, Aborto y Eutanasia*, UNAM- Jurídicas, México, D.F., 2008.

CÓDIGO Penal del Estado de Yucatán, 2014.

CONSTITUCIÓN Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2014.

FLORES, Fátima. "El VIH SIDA, Síntoma de vulnerabilidad". *En Representaciones sociales y contextos de investigación con perspectiva de género.* Cuernavaca, México: UNAM, CRIM, 2013.

GOBIERNO ESPAÑOL. *Manual en género en la Investigación.* España: Ministerio Ciencia e Innovación, 2011.

GROVER, Anand. *Relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)*, relatoría del 2011.

HERRERA, José Israel. *Peritaje antropológico. Sus realidades e imaginarios como prueba judicial federal*, Manejo Cultural A.C., México, D.F., 2010.

PROGRAMA de Acción del Cairo de la ONU adoptado por diferentes naciones en 1994.

RUIZ Olabuénaga, José Ignacio. *Metodología de la investigación cualitativa*, 3era edición, Universidad Deusto, Bilbao, España, 2003.

MOLINA Betancur, Carlos Mario. *El derecho al aborto en Colombia*, Universidad de Medellín, Medellín, Colombia, 2006.

MORA, Jazmín y FLORES, Fátima. Intervención comunitaria, género y salud mental. Aportaciones desde la teoría de las representaciones sociales. En N. Blazquez, F. Flores, & M. Ríos, *Investigación Feministas. Epistemología, Metodología y Representaciones Sociales* (págs. 359-378). México: UNAM, 2010.